



Asamblea General

Distr.
GENERAL

A/44/460

24 de agosto de 1989

ESPAÑOL

ORIGINAL: ARABE/ESPAÑOL/FRANCES/
INGLES/RUSO

Cuadragésimo cuarto período de sesiones
Tema 143 del programa provisional*

ARREGLO PACIFICO DE CONTROVERSIAS ENTRE ESTADOS

Informe del Secretario General

INDICE

	<u>Página</u>
I. INTRODUCCION	3
II. RESPUESTAS RECIBIDAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS	4
Argentina	4
Bolivia	5
Chad	8
Dominica	9
España	10
Jamahiriya Arabe Libia	11
República Socialista Soviética de Bielorrusia	12
Rumania	15

* A/44/150.

INDICE (continuación)

	<u>Página</u>
III. RESPUESTAS RECIBIDAS DE LAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES	19
A. Organismos especializados de las Naciones Unidas y Organismo Internacional de Energía Atómica	19
Organización Internacional del Trabajo	19
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura	19
Organización Mundial de la Salud	24
Unión Postal Universal	24
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual	25
Organismo Internacional de Energía Atómica	27
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio	27
B. Otras organizaciones intergubernamentales	27
Consejo de Europa	27
<u>Anexo.</u> Comunicación de la Asociación de Derecho Internacional	32

I. INTRODUCCION

1. El 9 de diciembre de 1988 la Asamblea General aprobó la resolución 43/163, titulada "Arreglo pacífico de controversias entre Estados", cuyos párrafos 1 a 5 son del siguiente tenor:

"La Asamblea General,

...

1. Insta nuevamente a todos los Estados a que, en el arreglo de sus controversias internacionales, cumplan y promuevan de buena fe las disposiciones de la Declaración de Manila sobre el Arreglo Pacífico de Controversias Internacionales;

2. Destaca la necesidad de perseverar en los esfuerzos por consolidar el proceso de arreglo pacífico de controversias mediante el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional y mediante una labor más efectiva de las Naciones Unidas en esa esfera;

3. Exhorta a los Estados Miembros a utilizar plenamente, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, el marco que proporcionan las Naciones Unidas para el arreglo pacífico de controversias y problemas internacionales;

4. Pide al Secretario General que le presente en su cuadragésimo cuarto período de sesiones un informe adicional que contenga las respuestas de Estados Miembros, órganos y organismos especializados competentes de las Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales regionales y órganos jurídicos internacionales interesados respecto de la aplicación de la Declaración de Manila y de posibles medios de dar mayor eficacia a ese instrumento;

5. Decide que la cuestión del arreglo pacífico de controversias entre Estados sea examinada en su cuadragésimo cuarto período de sesiones como tema separado del programa, conjuntamente con el tema del programa provisional titulado "Informe del Comité Especial de la Carta de las Naciones Unidas y del fortalecimiento del papel de la Organización".

2. El Secretario General, por nota de fecha 17 de febrero de 1989, invitó a los gobiernos de los Estados Miembros a que presentaran las respuestas a que se hace referencia en el párrafo 4 de la resolución 43/163. Una solicitud similar se envió al Presidente del Consejo de Seguridad y al Presidente de la Corte Internacional de Justicia y, por carta de fecha 17 de febrero de 1989, a los organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), las organizaciones intergubernamentales regionales y los organismos jurídicos internacionales pertinentes.

...

3. Al 11 de agosto de 1989 se habían recibido las respuestas de la Argentina, Bolivia, Chad, Dominica, España, (en nombre de los doce Estados miembros de la Comunidad Europea), la Jamahiriya Árabe Libia, la República Socialista Soviética de Bielorrusia y Rumania, así como de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Unión Postal Universal (UPU), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y el Consejo de Europa. Se recibió también una comunicación de la Asociación de Derecho Internacional. Las respuestas que se reciban en el futuro se reproducirán en adiciones al presente informe.

4. Se han recibido comunicaciones de la República Socialista Soviética de Bielorrusia (A/44/238 y Corr.1) y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (A/44/171) en las que informan acerca del retiro de las objeciones que habían hecho con anterioridad sobre el no reconocimiento de la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia respecto de los acuerdos relacionados con los derechos humanos.

II. RESPUESTAS RECIBIDAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS

ARGENTINA

[Original: español]
[24 de mayo de 1989]

1. La República Argentina privilegia los medios de solución pacífica de controversias contemplados en la Carta de nuestra Organización, demostrándolo en la práctica al resolver pacíficamente y mediante la firma de un tratado de paz y amistad el problema que mantenía con la República de Chile.

2. En cuanto a la aplicación de la Declaración de Manila sobre el Arreglo Pacífico de Controversias Internacionales, quisiera señalar que el Gobierno argentino ha adoptado medidas que se ajustan a la letra y el espíritu de la referida Declaración.

3. En este sentido, el Gobierno argentino reitera una vez más su interés en resolver pacífica y definitivamente la disputa de soberanía y demás problemas pendientes con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte respecto de las Islas Malvinas, así como su disposición a iniciar de inmediato negociaciones conforme lo establecido en las resoluciones aprobadas por la Asamblea General sobre este tema.

BOLIVIA

[Original: español]
[12 de julio de 1989]

1. Los conflictos territoriales y limítrofes en Latinoamérica han tenido una importancia histórica en el proceso de formación y desarrollo de los Estados americanos. Estos conflictos, resultado de la necesidad de fijar los límites de los Estados nacidos a la vida independiente a principios del siglo XIX, tuvieron una evidente trascendencia en el proceso histórico de afirmación nacional mediante la utilización de diversos procesos de solución pacífica, entre los que hay que destacar el uso del arbitraje, sobre todo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que significó un aporte de innegable trascendencia al derecho internacional.
2. Estos conflictos territoriales o limítrofes (especialmente los que aparecieron en el momento en que se formaron los nuevos Estados) no sólo se debieron a dificultades, imprecisiones, vacíos y errores en las delimitaciones coloniales, sino que en algunos casos fueron el resultado de procesos de expansión y de conquista, de factores económicos o de carácter político estratégico y de naturaleza militar.
3. Muchos de esos conflictos no están solucionados. Algunos se arrastran desde hace mucho tiempo; otros, son el resultado de la incidencia de nuevos factores. Es preciso encarar hoy, con renovada voluntad de arreglo y con buena fe, la resolución de esos conflictos, pues su mantenimiento es un factor negativo, de gravísima proyección en la necesaria política de unidad de integración latinoamericana. Los procedimientos deberán ser pensados en función de la realidad actual, asimilando las experiencias, pero en su variada diversidad. La utilización de cualquiera de ellos habrá de significar la renuncia al empleo de la fuerza y la convicción de que la solución pacífica de los diferendos territoriales o limítrofes en América es imprescindible para una política continental de desarrollo y progreso solidario. De todo ello, se desprende la necesidad de adoptar un enfoque multidisciplinario que tenga en cuenta todos estos factores y elementos y los analice técnicamente con los métodos y procedimientos de las diversas disciplinas involucradas. A esta conclusión metodológica debe agregarse la consideración esencial de que es preciso hacer un esfuerzo intenso y completo, a todos los niveles, para que la opinión pública continental comprenda la necesidad de encarar, con sinceridad y sin pasiones atávicas, la solución por la vía pacífica de todos los conflictos territoriales que subsisten en Latinoamérica.
4. El mantenimiento de casos no resueltos es un factor creador de tensiones, de costosas y peligrosas carreras armamentistas y de eventuales situaciones de violencia que no pueden aceptarse. Y, cuando hablamos de casos no resueltos, incluimos tanto aquellos que jurídicamente pueden clasificarse como casos en que existe un conflicto, contienda o diferencia en sentido jurídico estricto, como todos aquellos otros en que esta tipificación puede ser científica y jurídicamente discutible pero que objetivamente son generadores de tensiones y enfrentamientos.

5. En cuanto a los procedimientos para solucionar estos conflictos, es evidente que la gama de posibilidades a utilizar es lo suficientemente amplia como para permitir la elección de los más adecuados a la naturaleza y elementos particulares de cada uno de ellos. La solución pacífica de los conflictos territoriales o limítrofes en América Latina, se realizó en muchísimos casos mediante la aplicación de la fórmula de arbitraje. En realidad fue en América Latina donde mayor aplicación tuvo el arbitraje como procedimiento de solución pacífica de controversias limítrofes en la segunda mitad del siglo XIX y en gran parte del actual. No hay duda de que el arbitraje jugó en el pasado un papel importante y estabilizador aunque quizás hoy puede decirse que su aplicación para resolver este tipo de conflictos o diferencias está en decadencia. Una excepción ha sido la reciente sentencia arbitral objeto de duras controversias que no llegó a poder solucionar el conflicto del Canal de Beagle, cuyo arreglo debió encararse por la vía de la mediación papal y de las negociaciones directas, ya que se estimó que estos procedimientos podían ser más útiles y eficaces en la actualidad en América Latina.

6. Con todas las salvedades que acaban de hacerse, la aplicación del procedimiento arbitral en América Latina contribuyó al arreglo de gran cantidad de conflictos territoriales o limítrofes, sobre todo entre 1885 y 1925, con algunos casos anteriores y otros posteriores, algunos de ellos muy importantes.

7. La evolución posterior del arbitraje y sobre todo la crisis actual de este procedimiento como fórmula de solución de los conflictos territoriales, no trajo, ni podía traer como consecuencia, la negación de toda su acción positiva. Hoy la fórmula parece estar superada, sin perjuicio de su posible aplicación en algunos casos. Sin embargo, grandes cuestiones subsisten entre Colombia y Venezuela, por la delimitación del espejo de aguas, el lecho y el subsuelo del Golfo de Venezuela; entre Venezuela y Guyana, por el territorio de la Guyana Esequiba; entre Chile y Bolivia; entre Perú y Ecuador, y entre Argentina y Gran Bretaña por las Islas Malvinas, que habrán de resolverse preferentemente mediante negociaciones directas, buenos oficios o mediación.

8. Pero el estudio integral en lo jurídico, en lo político y en lo histórico de lo que fue la gran etapa de aplicación del arbitraje en materia territorial o limítrofe en América Latina, es presupuesto ineludible para encarar actualmente con perspectivas de éxito la búsqueda de soluciones a las cuestiones territoriales o limítrofes que no han podido ser todavía resueltas con justicia y cuya subsistencia indefinida incide de manera negativa en el destino común de todos los pueblos de nuestra América.

9. En este sentido se han hecho grandes esfuerzos, aunque con muy poco éxito. Así tenemos que en fecha 30 de abril de 1948, en la Novena Conferencia Internacional de Estados Americanos, celebrada en Bogotá, que diera origen a la Organización de los Estados Americanos (OEA), fue igualmente suscrito el "Tratado Americano de Soluciones Pacíficas de Controversias"; conocido bajo la denominación de "Pacto de Bogotá", como determina su artículo IX.

10. El texto del Pacto de Bogotá se mantiene idéntico al original de 1948; por otro lado, vemos que la Carta de la OEA, reformada ahora por el Protocolo de Cartagena de Indias, de diciembre de 1985, contempla en varios de sus artículos la solución pacífica de controversias (inciso c, del artículo 2, inciso h del

artículo 3, artículos 23, 26, 81, 84, 86 y 87). Asimismo observamos que, en escala mundial, ya la Sociedad de Naciones contemplaba la solución pacífica de controversias en los artículos 12 a 15 del Pacto; que tenía el grave defecto de exigir la regla de la unanimidad para las decisiones importantes y por ello fracasó en sus nobles propósitos. De todas formas, el Capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas está dedicado a la solución pacífica de controversias. El Artículo 33 determina que las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, por los medios pacíficos existentes en el derecho internacional. Si las partes no lograren arreglarla deberán someterla al Consejo de Seguridad.

11. El Consejo de Seguridad, si estima que la paz está en peligro, puede recomendar los procedimientos o métodos de ajuste que sean apropiados, pero antes debe realizar una investigación sobre la controversia o diferendo, y debe aportar una solución de fondo. En el caso de que fuera rechazada la solución y si determinara la existencia de una amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz y acto de agresión, el Consejo de Seguridad no sólo hará recomendaciones, sino, asimismo, podrá decidir respecto de qué medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada han de emplearse. En otras palabras, el Consejo de Seguridad puede recomendar y de la misma manera ordenar y, si no fuesen atendidas sus recomendaciones o sus órdenes, podría tomar medidas punitivas como el pedido de ruptura de relaciones diplomáticas de países miembros de las Naciones Unidas en contra del Estado que no hubiera atendido las recomendaciones del Consejo.

12. Las disposiciones procedentes, demuestran claramente que a lo largo del tiempo la comunidad internacional, tanto a nivel regional como mundial, ha estado en permanente búsqueda de medios pacíficos que contribuyan de manera significativa a la solución de conflictos entre Estados. En este último decenio, encontramos que la Declaración de Manila constituye el instrumento jurídico-político capaz de dar soluciones de manera pacífica a las controversias internacionales, en razón de que contiene en sus fundamentos el principio de la responsabilidad de los Estados de prevenir y resolver los conflictos sobre la base de normas y principios del derecho internacional. Otorga de esta forma la posibilidad a cada Estado parte de buscar intereses o posiciones coincidentes a través de consultas bilaterales y multilaterales en la solución de los conflictos. Por otra parte, advertimos que la Declaración de Manila busca el respeto y cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Carta de las Naciones Unidas cuando se deba poner en práctica los mecanismos para fortalecer la eficacia de la Organización en la esfera de las relaciones internacionales.

13. La Declaración de Manila está enmarcada en el principio de la prevención de los conflictos y la utilización de otros métodos pacíficos, como las consultas reservadas mediante comisiones de investigación enviadas por el Consejo de Seguridad, la designación de representantes especiales del Secretario General, o el pedido de una opinión a la Corte Internacional de Justicia, como mecanismo que mejore la eficacia de la Organización.

14. Estas son las razones por las que se afirma que la Declaración de Manila es el punto de partida para el cumplimiento de los propósitos y principios de la Carta en

este campo, ya que permite a los Estados Miembros arreglar sus diferencias en igualdad de condiciones jurídicas y políticas y en el marco de la igualdad soberana y en forma equitativa, por medios pacíficos, desechando el uso de las armas.

15. Bolivia, como ningún otro Estado, ha sufrido el rigor de las armas, con resultados que vulneran los principios y las normas del derecho internacional. Tal es el caso de la guerra del Pacífico de 1879, donde Bolivia, después de que se le arrebató una extensa parte de su territorio y su acceso al Océano Pacífico, fue obligada, bajo la presión de las armas, a suscribir un tratado con nefastas consecuencias para el desarrollo del país.

16. Por todas estas consideraciones, el 19 de octubre de 1988, la delegación de Bolivia, en ocasión de tratarse el tema titulado "Arreglo pacífico de controversias entre Estados" en la Sexta Comisión de la Asamblea General apoyó la propuesta de Rumania de establecer una comisión de las Naciones Unidas de buenos oficios, mediación o conciliación, sobre la base de la igualdad soberana de los Estados, como instrumento ejecutor de la Declaración de Manila y para asegurar el respeto a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, de modo de consolidar el multilateralismo y lograr que las naciones depositen su confianza en la Organización.

CHAD

[Original: francés]
[13 de junio de 1989]

1. De acuerdo con las disposiciones del Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas sobre el arreglo pacífico de controversias, las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales podrán buscar solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección.

2. La enunciación de ese principio recuerda estos otros principios:

a) El compromiso de los Estados Miembros de las Naciones Unidas de resolver pacíficamente mediante negociaciones bilaterales o multilaterales toda controversia cuya continuación amenace la paz y la seguridad internacionales;

b) La obligación de los Estados de recurrir en forma prioritaria a uno u otro de los procedimientos enumerados supra;

c) El arreglo pacífico de las controversias debe permitir que la paz y la seguridad internacionales se impongan como factor de distensión en las relaciones internacionales, y como factor de estabilidad y de progreso en los países miembros de las Naciones Unidas.

3. Sin embargo, y a pesar de la solemne afirmación de estos principios, las relaciones internacionales siguen siendo perturbadas por conflictos de todo tipo entre los Estados, lo que entraña graves pérdidas de vidas humanas y gastos materiales considerables.

...

4. Por su parte, el Chad ha adoptado el arreglo pacífico de las controversias internacionales como uno de los fundamentos esenciales de su política exterior. Su consagración a este principio ha cristalizado también en el restablecimiento, en octubre de 1988, de sus relaciones diplomáticas con Libia, que sigue ocupando parte de su territorio.

5. Esta actitud hace que el examen de la Declaración de Manila sobre el Arreglo Pacífico de Controversias Internacionales y sobre los medios y arbitrios de fortalecer la eficacia de este instrumento gire en torno de las ideas siguientes:

a) La Declaración de Manila, al contribuir a los esfuerzos realizados con miras a fortalecer el proceso del arreglo pacífico de las controversias, podrá convertirse en un marco jurídico en el que se definirá un nuevo enfoque de las relaciones internacionales basado en los principios del derecho internacional y en factores como el respeto de la palabra dada o la práctica de una solidaridad eficiente;

b) La Declaración de Manila, por tener por miras precisar el contenido de la Carta de las Naciones Unidas para acrecentar el papel de la Organización como garantía de paz y seguridad internacionales, podrá convertirse, forjando paulatinamente sus mecanismos y sus procedimientos, sus tradiciones y su derecho aplicable, en un instrumento eficaz para la solución pacífica de las controversias internacionales;

c) La aprobación por la Asamblea General de esta Declaración contribuirá sin la menor duda a reducir las tensiones internacionales y a establecer un clima de paz y de confianza en el mundo. Pero las relaciones internacionales serían aún mejores si los Estados instituyeran y aceptaran sistemáticamente ciertas prácticas, en especial la obligación de los Estados de incluir en todos los tratados de amistad y cooperación que han firmado entre sí una disposición especial por la que se invite a las partes en una controversia a buscar soluciones por vías pacíficas. Se trata de encontrar, mediante la aplicación de esta práctica, fórmulas aceptables para todas las partes.

DOMINICA

[Original: inglés]

[20 de junio de 1989]

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Commonwealth de Dominica desea informar que, después de examinar cuidadosamente la Declaración de Manila sobre el Arreglo Pacífico de Controversias Internacionales, el Gobierno del Commonwealth de Dominica declara por la presente su apoyo a la aplicación de dicha Declaración.

ESPAÑA

[En nombre de los Doce Estados Miembros de la Comunidad Europea]

[Original: inglés]
[25 de mayo de 1989]

Los Doce Estados Miembros de la Comunidad Europea desean recordar la declaración conjunta formulada en su nombre por el representante de Grecia mediante una explicación de voto ante la Sexta Comisión el 18 de noviembre de 1988 que sigue reflejando su posición:

"Nos contamos entre los - lamentablemente - pocos Estados que en diversas cuestiones relativas a la cooperación internacional, han aceptado procedimientos obligatorios y vinculantes de arreglo de controversias, bien ante la Corte Europea de Justicia de Luxemburgo, la Comisión y Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y otros órganos judiciales internacionales como la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Esta actitud ante el arreglo pacífico de controversias es parte fundamental y natural de la actitud de los Doce ante las relaciones internacionales y es de todos sabido que apoyamos enérgicamente toda medida constructiva que pueda fortalecer el principio del arreglo pacífico a nivel universal. Sin embargo, debido al tenor de los párrafos 4 y 5 y parte del preámbulo, la mayor parte de los miembros de la Comunidad Europea no han podido dar apoyo a la resolución que se acaba de aprobar.

Con respecto al párrafo 4, desearía recordar que nos sumamos a la aprobación por consenso de la Declaración de Manila sobre el Arreglo Pacífico de Controversias Internacionales y no hemos modificado nuestra posición al respecto. El año pasado señalamos que la mayoría de nuestros países no lograban ver los méritos de establecer un procedimiento de cuestionario sobre la aplicación de una declaración que había sido adoptada apenas seis años antes y, en particular, sobre los medios de aumentar su eficacia. Es evidente que las respuestas por escrito no pueden remediar el verdadero problema, es decir la falta generalizada de voluntad política de utilizar los procedimientos ya establecidos para el arreglo pacífico de controversias internacionales.

Lo que se necesita y debe repetirse una y otra vez es un enérgico llamamiento a los gobiernos a fin de que conozcan y utilicen los diversos procedimientos vigentes para el arreglo de controversias internacionales a las que se refiere la Carta. El lugar lógico para formular dicho llamamiento es la resolución del Comité Especial de la Carta de las Naciones Unidas y sobre el fortalecimiento del papel de la Organización, que ya se ocupa de problemas relativos al arreglo de controversias. Nos parece superflua la aprobación por separado de otro tema del problema y otra resolución relativa a esta cuestión según se prevé en el párrafo 5.

Por los motivos señalados, la mayoría de nuestras delegaciones no han podido apoyar la resolución y, en particular, los párrafos 4 y 5."

JAMAHIRIYA ARABE LIBIA

[Original: árabe]
[10 de julio de 1989]

1. En su condición de Estado Miembro de las Naciones Unidas consagrado a los principios de la Carta y a los tratados internacionales y el derecho consuetudinario, y como país que cree en el derecho de los pueblos a vivir en la seguridad y la paz, la gran Jamahiriya Arabe Libia Popular y Socialista reitera su reconocimiento de la importancia del principio del arreglo pacífico de las controversias. Es éste un principio que se enraiza en la Carta y en los propósitos y principios de las Naciones Unidas y no caben dudas de que si los Estados pudieran resolver sus problemas de acuerdo con esos principios construirían un edificio para la paz y un puntal para la seguridad internacional en beneficio y para ventaja de todos los pueblos.
2. Los medios que promueven y hacen posible la consecución del principio del arreglo pacífico de las controversias son muchos y universales. Incluyen la sincera intención de los Estados de respetar su mutua soberanía, la no injerencia en los asuntos de otros Estados y la aplicación del principio de la buena vecindad. Los Estados deben evitar en primer lugar que surjan problemas como cuestión de principio. Sin embargo, si llegara a ocurrir, debe otorgarse a los órganos jurídicos internacionales del sistema de las Naciones Unidas el papel primordial de resolver las controversias internacionales por medios pacíficos.
3. Los Estados tienen la obligación de informar a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad acerca de sus conflictos y sus problemas inmediatamente después de que ocurran. Hay otros problemas técnicos y jurídicos que deben someterse a la Corte Internacional de Justicia, cuya jurisdicción para la solución de problemas entre Estados debe reconocerse. La Jamahiriya Arabe Libia también reconoce el valor de los buenos oficios, la mediación y la conciliación para conciliar los puntos de vista de los Estados que tienen controversias y alentarlos a resolver sus diferencias por medios pacíficos.
4. Basándose en la necesidad de fortalecer la paz y la seguridad internacionales y de prevenir el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la República Arabe Libia es de opinión que los conflictos internacionales deben resolverse por medios pacíficos. Todos deben respetar el derecho de los Estados a optar por sus propios sistemas económicos, políticos y sociales, y no debe haber injerencias con esos sistemas. De esta manera se reducirá la incidencia de conflictos entre Estados. Es necesario reconocer la necesidad de la seguridad internacional colectiva y adoptar medidas para el desarme. En opinión de la República Arabe Libia, esas medidas contribuirán a reducir los conflictos internacionales y darán la certeza de lograr la paz. Los Estados deben comenzar a establecer relaciones bilaterales y multilaterales de un tipo tal que resuelvan sus problemas y aseguren que entre ellos no haya agresiones. Las organizaciones internacionales tienen el deber de asistir a los Estados a lograr el acercamiento y la comprensión mutua, a tomar la iniciativa en la prevención de problemas y conflictos internacionales y anticiparse a esos problemas logrando rápidamente soluciones.

5. Dentro del marco de la búsqueda jurídica de métodos para promover la aplicación de los principios del arreglo pacífico de las controversias, la Jamahiriya Arabe Libia valora el papel de la Comisión de Derecho Internacional, que procura redactar un instrumento internacional para el arreglo pacífico de las controversias.

6. La gran Jamahiriya Arabe Libia Popular y Socialista tiene el máximo interés en que este principio quede consagrado en el mundo de la realidad. Está poniendo fin a su conflicto con su vecino meridional, el Chad; se ha plegado a la Unión Arabe del Maghreb y, dentro del marco de la unidad africana, colabora en favor del arreglo pacífico de las controversias y para poner fin a la guerra entre el Irán y el Iraq.

7. La gran Jamahiriya Arabe Libia Popular y Socialista, fundamentándose en su justa posición respecto del derecho de los pueblos a la independencia, la soberanía y la no agresión, ha votado a favor de la resolución que recomienda apoyar el principio del arreglo pacífico de las controversias en el cuadragésimo tercer período de sesiones de la Asamblea General.

REPUBLICA SOCIALISTA SOVIETICA DE BIELORRUSIA

[Original: ruso]
[26 de junio de 1989]

1. La República Socialista Soviética de Bielorrusia reitera su consagración al principio del arreglo pacífico de controversias entre Estados y su aprobación del aumento de la eficacia de las Naciones Unidas en esta esfera de sus actividades.

2. Los esfuerzos realizados para fomentar el arreglo pacífico de las controversias entre Estados no sólo habrán de fortalecer la eficacia de los medios previstos en la Carta de las Naciones Unidas para el arreglo pacífico de conflictos y controversias sobre la base de la libre elección de dichos medios por las partes, sino que contribuirán también a su perfeccionamiento ulterior.

3. En muchos casos la armonización de las relaciones bilaterales y multilaterales requiere también la creación de nuevas formas de relaciones internacionales, la internacionalización del diálogo y del proceso de negociación y la exclusión de las ideologías en las relaciones entre los Estados.

4. El acrecentamiento de sus funciones de mantenimiento de la paz que han desempeñado recientemente las Naciones Unidas ha demostrado una vez más la capacidad de la Organización para ayudar a sus Miembros a resolver enormes problemas y procurar la humanización de las relaciones internacionales.

5. En virtud de su propia naturaleza y finalidad, las Naciones Unidas pueden promover el fortalecimiento del orden jurídico internacional y de la legalidad asegurando el respeto fiel de la Carta por todos los Estados y afirmando la primacía del derecho internacional en la política. En la era nuclear y espacial, la eficacia del derecho internacional debe basarse no en el uso de la fuerza sino en el uso de aquellas estructuras que reflejan el equilibrio de los intereses de los Estados y a las medidas colectivas convenidas.

6. El concepto de un enfoque amplio del problema de la seguridad internacional, presentado a las Naciones Unidas por el grupo de países socialistas, se ha proyectado para fortalecer el papel de la Organización en el arreglo de los conflictos regionales, sobre la base de los principios establecidos en la Carta y ofrece un verdadero método para construir un mundo seguro en el que prevalezcan los medios políticos y jurídicos para la solución de los problemas.

7. En el período transcurrido desde que se aprobó la Declaración de Manila, la República Socialista Soviética de Bielorrusia ha prestado apoyo general al proceso de elaboración y adopción de instrumentos internacionales proyectados para reducir la tensión internacional y aplicar un enfoque constructivo a la solución de problemas internacionales, dentro del espíritu del nuevo pensamiento político.

8. Entre esos instrumentos, los más importantes son la Declaración sobre el mejoramiento de la eficacia del principio de la abstención de la amenaza o de la utilización de la fuerza en las relaciones internacionales y la Declaración sobre la prevención y la eliminación de controversias y de situaciones que puedan amenazar la paz y la seguridad internacionales y sobre el papel de las Naciones Unidas en esa esfera, aprobadas por la Asamblea General en su cuadragésimo segundo y cuadragésimo tercer períodos de sesiones por resolución 42/22 de 18 de noviembre de 1987 y resolución 43/51 de 5 de diciembre de 1988, respectivamente.

9. La base para poner en práctica el concepto de la primacía del derecho internacional en las relaciones internacionales consiste en la aplicación plena y no selectiva de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas por todos los Estados Miembros.

10. El Comité Especial de la Carta de las Naciones Unidas y del fortalecimiento del papel de la Organización debe desempeñar un papel importante en la formulación de este concepto.

11. La República Socialista Soviética de Bielorrusia atribuye suma importancia a la elaboración por este órgano de un instrumento internacional que por primera vez en la práctica de las Naciones Unidas afirme la importancia de un instituto internacional de investigación y determinación de hechos como componente esencial de la capacidad de la Organización para mantener la paz. Este componente deberá facilitar el fomento de la confianza y dará un mundo más predecible y más estable. Deberán formar parte de este instrumento una extensa serie de mecanismos y métodos de investigación y determinación de hechos que podrían utilizar los Estados y los órganos de las Naciones Unidas para obtener la información más general posible sobre las controversias y los conflictos, anticiparlos y prevenirlos, lograr acuerdos políticos y realizar una vigilancia imparcial del cumplimiento de los acuerdos concertados.

12. La República Socialista Soviética de Bielorrusia apoya la propuesta de establecer dentro de las Naciones Unidas una comisión de buenos oficios, mediación o conciliación, como mecanismo para el arreglo de las controversias entre Estados, sobre la base de su igualdad soberana y el respeto del principio de la libre elección de los medios, de conformidad con los compromisos asumidos respecto de la Carta y los principios del derecho internacional.

13. Sería también importante que el Comité Especial completara la preparación de un manual en que se describiera una amplia gama de mecanismos y medios para el arreglo pacífico de las controversias y los conflictos, que podrían utilizar los Estados en sus relaciones mutuas. Este manual sería de gran valor práctico para los Estados y serviría como una guía, única en su género, para orientar sus actividades en el arreglo pacífico de las controversias y desacuerdos.

14. De acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas el Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. Al respecto deberán continuar usándose cada vez más los mecanismos de consultas oficiales y oficiosas del Consejo con la participación del Consejo de Seguridad y las partes directamente interesadas. En esta esfera, podría desempeñar un papel positivo la celebración de reuniones periódicas del Consejo, a nivel de ministros de relaciones exteriores inmediatamente antes o durante la celebración de un período de sesiones de la Asamblea General.

15. La República Socialista Soviética de Bielorrusia cree que sería conveniente confiar al Comité Especial la tarea de examinar las cuestiones relativas a las medidas provisionales que adopte el Consejo de Seguridad en virtud del Artículo 40 de la Carta para prevenir que las situaciones se agraven e impedir conflictos regionales, para imponer sanciones contra los Estados que hayan quebrantado la paz y no hayan cumplido las decisiones del Consejo, y para mejorar la eficacia de los mecanismos de verificación de hechos e investigación de las controversias y conflictos internacionales.

16. La República Socialista Soviética de Bielorrusia cree que es necesario aprovechar más las posibilidades que ofrece la Asamblea General. Los efectos cada vez mayores de las resoluciones aprobadas y decisiones adoptadas sobre la base de un consenso y el mejoramiento de la eficacia de los mecanismos para vigilar el cumplimiento de sus resoluciones facilitarán los esfuerzos que se realizan para utilizar más plenamente la capacidad potencial de la Asamblea General. Podrían convertirse en parte integral de este mecanismo los períodos extraordinarios de sesiones de la Asamblea General dedicados a las cuestiones específicas que tienen por fin garantizar la seguridad general.

17. La República Socialista Soviética de Bielorrusia cree que debería ampliarse el papel que desempeña el Secretario General en las cuestiones relacionadas con el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. El Secretario General podría pedir al Consejo de Seguridad que convocara reuniones para poder informarle periódicamente sobre la situación en las regiones de conflicto y sobre cuestiones relacionadas con el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

18. La Corte Internacional de Justicia también debe desempeñar una importante función en el arreglo de controversias internacionales. La carta enviada en abril de 1989 al Secretario General por el Ministro de Relaciones Exteriores de la República Socialista Soviética de Bielorrusia (A/44/238 y Corr.1) debe considerarse como una confirmación de la creciente importancia que asigna a la Corte la República Socialista Soviética de Bielorrusia. En la carta se declara que la República Socialista Soviética de Bielorrusia, guiada por la necesidad de reafirmar la primacía del derecho en la política y de acrecentar el papel y el potencial de

la Corte Internacional de Justicia, ha procedido a tomar medidas para retirar las reservas que había formulado en relación con la jurisdicción de la Corte respecto de diversos instrumentos internacionales en los cuales la República es parte.

19. Con el fin de impedir conflictos armados inminentes debe tenerse en cuenta la posibilidad de recurrir a operaciones de las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas como parte importante e integral de las garantías políticas multilaterales de paz y como medio de establecer una seguridad general al hacer posible el mejoramiento de la situación en las zonas de conflicto, evitar los conflictos inminentes, reducir los gastos militares y mejorar las perspectivas para el desarrollo. Las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas deberían realizarse cada vez más frecuentemente con fines preventivos. El Consejo de Seguridad podría, después de celebrar consultas con las organizaciones regionales pertinentes, establecer puestos de observadores de las Naciones Unidas en las regiones del mundo donde la situación es más candente.

20. La República Socialista Soviética de Bielorrusia cree que sería aconsejable el envío de misiones especiales, previa decisión del Consejo de Seguridad, para investigar situaciones relacionadas con recriminaciones mutuas.

21. El arreglo pacífico de las controversias internacionales debe considerarse como una de las principales esferas de actividad de las Naciones Unidas y, en particular, del Comité Especial de la Carta de las Naciones Unidas y del fortalecimiento del papel de la Organización. La República Socialista Soviética de Bielorrusia, por su parte, está dispuesta a continuar colaborando en la aplicación de las disposiciones previstas en las decisiones de las Naciones Unidas sobre el arreglo pacífico de controversias y en la elaboración y aprobación de nuevas medidas prácticas convenidas para el arreglo de las controversias y los conflictos entre Estados o para asegurar su prevención en tiempo oportuno sobre la base de acuerdos internacionales.

RUMANIA

[Original: inglés]
[31 de julio de 1989]

1. Las respuestas solicitadas por el Secretario General, de conformidad con el párrafo 4 de la resolución 43/163 de 9 de diciembre de 1988, en relación con la aplicación de la Declaración de Manila sobre el Arreglo Pacífico de Controversias Internacionales y de posibles medios y arbitrios para fortalecer la eficacia de ese instrumento, ofrecen a los Estados una buena oportunidad para dar a conocer sus opiniones y las actividades realizadas durante el período 1982-1989 en una esfera esencial de la labor de las Naciones Unidas.

2. El 21 de julio de 1988, Rumania presentó una respuesta amplia sobre el tema. La respuesta se reprodujo in extenso en el informe del Secretario General (A/43/530 y Add.1 y 2) que sirvió de base para el examen del tema titulado "Arreglo pacífico de controversias entre Estados", durante el cuadragésimo tercer período de sesiones de la Asamblea General.

3. Rumania desea reafirmar su posición de principio de que todos los conflictos, controversias y litigios, sin excepción y cualesquiera que sean su naturaleza, su forma, sus causas y el lugar en donde ocurran, pueden resolverse por medios pacíficos o negociaciones entre las partes directamente interesadas.

4. Resumiendo la posición de Rumania al respecto, el Presidente Nicolae Ceausescu formuló la siguiente declaración el 28 de junio de 1989: "Rumania reitera su firme apoyo a la cesación de los conflictos que existen en diversas partes del mundo y al arreglo de controversias entre Estados, exclusivamente mediante la negociación". En sus más recientes documentos de política, Rumania destaca que continuará luchando por la eliminación del uso de la fuerza y la amenaza del uso de la fuerza en asuntos internacionales y por el arreglo de toda controversia entre Estados por medios exclusivamente pacíficos.

5. En este contexto, Rumania acoge con beneplácito la iniciativa que figura en la Declaración de La Haya de la Reunión de los Ministros de Relaciones Exteriores del Movimiento de los Países No Alineados para examinar la cuestión de la paz y el imperio del derecho en los asuntos internacionales (A/44/191) de 29 de junio de 1989 de proclamar un Decenio de las Naciones Unidas para el Derecho Internacional que comenzaría en 1990 y terminaría en 1999. Particularmente importantes son las propuestas que figuran en dicha Declaración sobre la promoción y el mejoramiento de los métodos pacíficos para el arreglo de controversias entre Estados, así como los que se relacionan con el respeto a los principios jurídicos internacionales contra el uso o la amenaza del uso de la fuerza, la intervención, la injerencia y otras medidas de coerción en las relaciones internacionales.

6. En este sentido, subrayamos el vínculo armonioso y orgánico que existe entre las disposiciones de la Declaración de La Haya (A/44/191) y el séptimo párrafo del preámbulo de la resolución 43/163 de la Asamblea General sobre el arreglo pacífico de controversias, en que se destaca el deber que tienen todos los Estados de fomentar una política de respeto de la independencia y la soberanía nacionales de los demás Estados, de no injerencia en los asuntos internos y entendimiento y cooperación, que es un requisito básico para reducir la tensión y establecer un clima de paz y confianza mutua en el mundo.

7. La posición de Rumania respecto de la aplicación de la Declaración de Manila sobre el Arreglo Pacífico de Controversias Internacionales se ha expresado en los párrafos 3 a 24 de su respuesta anterior reproducida en el informe del Secretario General de fecha 6 de septiembre de 1988 (A/43/530 y Add.1 y 2). Las consideraciones que figuran en dicha respuesta mantienen su vigencia.

8. Las disposiciones de la Declaración de Manila sobre el Arreglo Pacífico de Controversias Internacionales se han seguido reflejando en tratados, declaraciones conjuntas y comunicados, así como en otros instrumentos bilaterales y multilaterales de los Estados Miembros de las Naciones Unidas. La práctica de Rumania en esta esfera ofrece numerosos ejemplos que ilustran el compromiso de este país con la aplicación del principio del arreglo pacífico de las controversias internacionales.

9. Mediante su patrocinio y su voto favorable, Rumania ha dado apoyo a muchas resoluciones de la Asamblea General que contienen disposiciones concretas sobre el arreglo pacífico de controversias y conflictos en diversas zonas del mundo o en que se destaca la necesidad de adoptar medidas ulteriores para fortalecer el principio del arreglo pacífico de controversias. En consecuencia, en la resolución 43/88 de la Asamblea General de 7 de diciembre de 1988, se insta una vez más a los Estados Miembros a que se abstengan de recurrir al uso o a la amenaza del uso de la fuerza, la intervención, la injerencia, la agresión, la ocupación extranjera y la dominación colonial o a medidas coercitivas de tipo político y económico que violan la soberanía, la integridad territorial, la independencia y la seguridad de otros Estados. En la misma resolución se insta a los Estados a que traten de lograr, mediante una utilización más eficaz de los medios previstos en la Carta, el arreglo pacífico de las controversias y la eliminación de los focos de crisis y tensión que constituyen una amenaza a la paz y la seguridad internacionales.

10. En la resolución 43/163 de la Asamblea General de 9 de diciembre de 1988, patrocinada por Rumania y otros 53 Estados, se destaca la necesidad de perseverar en los esfuerzos por consolidar el proceso de arreglo pacífico de controversias mediante el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional y mediante una labor más eficaz de las Naciones Unidas en esa esfera.

11. A la luz de esta disposición, Rumania celebra con beneplácito el consenso alcanzado en 1989 en el Comité Especial de la Carta de las Naciones Unidas y del fortalecimiento del papel de la Organización sobre la propuesta relativa a recurrir a una comisión de buenos oficios, mediación o conciliación dentro de las Naciones Unidas para el arreglo pacífico de controversias internacionales. Además, Rumania celebra el progreso realizado en la elaboración del proyecto de manual sobre el arreglo pacífico de controversias entre Estados. En el informe del Comité Especial sobre su período de sesiones de 1989 (A/44/33), que se examinará en el cuadragésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea General, figuran los elementos necesarios para asegurar un debate constructivo sobre estas cuestiones.

12. A la luz del pedido formulado por la Asamblea General en su resolución 43/163 de que el Secretario General, al presentar un informe en que figuraran las respuestas de los Estados Miembros, los órganos de las Naciones Unidas y otras organizaciones sobre los posibles medios de dar mayor eficacia a la Declaración de Manila, Rumania estima que la Asamblea y los Estados Miembros podrían considerar la adopción de las medidas siguientes:

a) La reafirmación, mediante resoluciones de la Asamblea General y otros instrumentos internacionales, de la necesidad de no escatimar esfuerzos para que todos los Estados observen y apliquen plenamente la Declaración y la den a conocer a nivel universal.

b) El examen constante dentro de las Naciones Unidas y otros foros internacionales de la cuestión del arreglo pacífico de controversias en todos sus aspectos. Con la adopción de la Declaración de Manila no se ha agotado el tema.

Este es sólo el comienzo, y existe la intención de estimular la labor de codificación y elaboración progresivas de normas y procedimientos para el arreglo pacífico de controversias, así como los esfuerzos de los Estados Miembros para mejorar el poder de acción de las Naciones Unidas en esta esfera.

c) La elaboración y adopción de una convención universal sobre el arreglo pacífico de controversias, que debería corresponder a las necesidades actuales de las relaciones internacionales.

d) La inclusión del arreglo pacífico de controversias como elemento prioritario en el Programa de las Naciones Unidas de asistencia para la enseñanza, el estudio, la difusión y un mayor reconocimiento del derecho internacional.

13. Rumania celebra que la idea de elaborar un instrumento jurídico universal sobre el arreglo pacífico de controversias, que figura en el párrafo 28 de la respuesta de Rumania de 21 de julio de 1988 y se reproduce en el informe del Secretario General (A/43/530), se refleje en la Declaración de los Ministros de Relaciones Exteriores del Movimiento de Países No Alineados (A/44/191) aprobada en La Haya el 29 de junio de 1989. La decisión de los países no alineados de encomendar al Grupo de Trabajo encargado de la solución pacífica de controversias, del Buró de Coordinación, la tarea de examinar los instrumentos internacionales vigentes relativos al arreglo pacífico de controversias con miras a redactar un proyecto de convención internacional tiene importancia fundamental en el contexto de los asuntos internacionales. Rumania apoya esta iniciativa y estima que su aplicación en las Naciones Unidas será una valiosa contribución al fortalecimiento del principio y la práctica del arreglo pacífico de controversias en la conducta de los Estados.

14. Al encomiar la iniciativa de los países no alineados de proclamar un Decenio del Derecho Internacional (1990-1999), Rumania considera que la aplicación de su programa redundará en el fortalecimiento de todos los medios de arreglo pacífico de controversias, la generalización del respeto universal por los principios y normas del derecho internacional y una mejor comprensión del papel del derecho en la promoción y mantenimiento de la paz y la seguridad mundiales.

15. Rumania reafirma su convicción de que el respeto universal del principio del arreglo pacífico de controversias internacionales hará una valiosa contribución a la defensa de la paz y la seguridad mundiales y dará nuevo ímpetu a las Naciones Unidas para desempeñar en la mejor forma su misión suprema: salvar a las generaciones presentes y futuras del flagelo de la guerra.

III. RESPUESTAS RECIBIDAS DE LAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

A. Organismos especializados de las Naciones Unidas y Organismo Internacional de Energía Atómica

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO

[Original: inglés]
[17 de marzo de 1989]

1. Cabe referirse, en particular a dos conjuntos de disposiciones de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo que rigen el arreglo de controversias relativas, en primer lugar, al cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de convenios ratificados y, en segundo lugar, a la interpretación de los convenios o la Constitución propiamente dicha y al procedimiento extraconstitucional para el arreglo de controversias relativas a derechos sindicales.

2. El primer conjunto de disposiciones comprende los artículos 26 a 34 de la Constitución de la OIT, que tratan de situaciones en que a un Estado miembro no le consta que otro miembro procura obtener el cumplimiento efectivo de un convenio internacional de trabajo ratificado por ambos. El segundo conjunto de disposiciones constitucionales se refiere a controversias relacionadas con la interpretación de la constitución o de cualquier convenio subsiguiente concertado en virtud de la Constitución.

3. La Constitución no prevé en forma explícita otros procedimientos que pueden ser de interés. Como resultado de las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración de la OIT y por el Consejo Económico y Social, existen otros dos órganos de la OIT que tienen competencia para oír denuncias, incluidas las denuncias formuladas por el gobierno de un Estado acerca de presuntas violaciones de derechos sindicales por parte de un Estados miembro, aun en caso de que el Estado miembro no sea parte en el convenio internacional de trabajo pertinente. Estos órganos son el Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Investigación y Conciliación en materia de Libertad Sindical. Por supuesto, estos dos últimos órganos presentan informes al Consejo de Administración con las recomendaciones adecuadas.

ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA

[Original: francés]
[2 de mayo de 1989]

1. La contribución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a la resolución de que se trata se sitúa en el marco del programa principal XIII, paz, comprensión internacional, derechos humanos y derechos de los pueblos y, en particular, el subprograma XIII.1.1., reflexión sobre los factores que contribuyen a la paz.

2. Las actividades realizadas a partir de 1987 han tenido por objeto ampliar el papel de la UNESCO en lo referente a la enseñanza y la investigación en materia de derecho internacional, incluido el derecho humanitario. Esencialmente, las actividades fueron las siguientes:

- a) Una consulta oficiosa sobre la enseñanza y la investigación en materia de derecho internacional público (UNESCO, 2 a 4 de febrero de 1987);
- b) Un seminario internacional sobre los factores educacionales, científicos y culturales favorables a la paz, incluida la cooperación regional;
- c) Un curso postuniversitario de formación regional en derecho internacional;
- d) Publicaciones de la UNESCO sobre derecho internacional y de la paz.

Consulta oficiosa sobre la enseñanza y la investigación
en materia de derecho internacional público

3. La UNESCO organizó del 2 al 4 de febrero de 1987, en su sede, una consulta oficiosa sobre la enseñanza y la investigación en materia de derecho internacional público que venía a continuar las actividades realizadas por la Organización desde mediados del decenio de 1960. Los debates se centraron fundamentalmente en torno a los puntos siguientes.

a) Enseñanza

4. La mayoría de los participantes observaron que la enseñanza del derecho internacional público había experimentado cierto retroceso. Este retroceso se manifiesta en dos formas: por una parte, se observa en cierto número de Estados una fragmentación de los programas de enseñanza del derecho internacional, lo que se traduce en el plano pedagógico en la multiplicación de cursos especializados, limitados a materias más o menos precisas de derecho internacional. Esta orientación se debe a un mismo tiempo al aumento del tecnicismo del derecho internacional, a su ampliación a esferas cada vez numerosas, abandonadas anteriormente a los derechos nacionales y sin duda al deseo de los estudiantes de adquirir conocimientos inmediatamente rentables.

5. Aunque la adquisición de conocimientos profundos de derecho internacional exija cierta inevitable especialización, al igual que en el caso de otras disciplinas jurídicas, es indispensable que no se pierda de vista que las distintas partes del derecho internacional constituyen un todo indisoluble, cuyos principios dominantes y racionalidad conviene aprehender. La especialización excesiva origina el peligro de que se releguen a segundo plano los principios fundamentales que dan al derecho internacional, en cada uno de los principios de su evolución, su tono general. En consecuencia, la especialización puede originar también el peligro de que se oculte el significado profundo del derecho internacional como expresión de una cultura determinada, fundada en valores que han adquirido con el paso del tiempo un alcance universal y que son esenciales para el mantenimiento de la paz en el mundo y el acercamiento entre los pueblos.

6. Por otro lado, el retroceso en la enseñanza del derecho internacional se manifiesta igualmente en el carácter facultativo de la enseñanza del derecho internacional. En efecto, esta disciplina no es siempre y en todas partes obligatoria, ni siquiera para los juristas ni con mayor razón para los economistas y estudiantes de ciencias políticas, para no hablar de los estudiantes de ciencias sociales y humanas. Aun en los casos en que la enseñanza del derecho internacional es obligatoria, el número de horas que a ella se dedica es en términos generales notablemente insuficiente.

7. El intercambio de opiniones indujo a los participantes a desear que la UNESCO se esforzase por conseguir que los Estados requiriesen que todos los estudiantes de las facultades de derecho, de economía y de ciencias políticas recibiesen, a título obligatorio, una enseñanza que implicara un mínimo de conocimientos generales para que los valores contenidos en los principios fundamentales del derecho internacional llegaran a ser un elemento importante de la cultura.

b) Investigación

8. Varios participantes pusieron de relieve la necesidad de elaborar un enfoque crítico del derecho internacional clásico, formado en una época en que la sociedad internacional era mucho menos heterogénea que en la actualidad, habida cuenta de la diversificación de las formas sociales y de la aparición de nuevos factores en la esfera internacional. Un enfoque de esa índole permitiría que se tuviesen en cuenta las aspiraciones de los Estados del tercer mundo, mantenidos durante largo tiempo al margen de la elaboración del derecho internacional. Los participantes preconizaron la multiplicidad de los enfoques.

9. En particular, el derecho consuetudinario no parece ser fundamentalmente, en definitiva, otra cosa que el derecho constituido a partir de la práctica de los Estados occidentales. Ahora bien, hoy día se está realizando en los Estados del tercer mundo una práctica que es preciso aclarar elaborando, con la ayuda de la UNESCO, repertorios de la práctica vigente en esos Estados, así como las organizaciones regionales y subregionales creadas por ellos.

10. Desde el punto de vista de la documentación, sin la que no hay investigación posible, se ha observado que conviene distinguir entre la política a largo, mediano y corto plazo. Si bien conviene disponer de repertorios de la práctica, tal objetivo no es alcanzable sino a largo plazo, habida cuenta de la importancia de los medios que han de utilizarse y de la dificultad de reunir los materiales disponibles.

11. Por el contrario, a corto plazo, es sin duda más fácil orientar las investigaciones hacia el conocimiento de la práctica de los Estados en materia de relaciones internacionales gracias a la publicación de anuarios de derecho internacional público, existentes en diversos Estados, o al menos de anuarios regionales. Conviene que la UNESCO estimule esas iniciativas.

12. Es igualmente indispensable resolver, con suficiente rapidez, algunos problemas de orden práctico para facilitar el conocimiento del derecho internacional, particularmente en los Estados del tercer mundo que no disponen, como los Estados desarrollados, de los medios necesarios para la investigación: obras fundamentales, actuales o antiguas, bibliografías generales o especializadas, bancos de datos, lista de los organismos capaces de suministrar una documentación fácilmente accesible sobre un problema determinado, etc. En relación con este punto, la UNESCO podría aportar una contribución decisiva facilitando, en cooperación con otras instituciones, la solución de los problemas de documentación. Este es el objetivo perseguido con la preparación por la UNESCO de un manual de derecho internacional público.

Seminario internacional sobre los factores educativos,
científicos y culturales favorables a la paz, incluida
la cooperación regional

13. La UNESCO organizó del 12 al 15 de octubre de 1987 en Río de Janeiro, Brasil, en cooperación con la Asociación Internacional de Investigaciones sobre la Paz y la Sociedad Brasileña de Enseñanza, un seminario internacional en el que participaron 30 especialistas procedentes de 12 países de distintas regiones del mundo.

14. El seminario examinó, en particular, un estudio sobre las causas y consecuencias de las violaciones de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, el empleo o la amenaza del empleo de la fuerza, la intervención extranjera, la injerencia en los asuntos internos de los Estados y la agresión armada.

Curso de formación postuniversitaria en África sobre
el derecho internacional

15. La UNESCO organizó del 7 al 13 de enero de 1988, en cooperación con la Universidad de Burundi, un curso de formación regional postuniversitaria sobre el derecho internacional, que se celebró en Bujumbura. Un equipo internacional de profesores de derecho internacional tuvo a su cargo la dirección del curso de formación, en el que participaron 60 personas, entre las que figuraban educadores, funcionarios nacionales, consejeros ministeriales y magistrados.

16. Los participantes se distribuyeron en grupos de trabajo para elaborar una decisión arbitral sobre una controversia relativa al derecho de tránsito entre tres Estados. Para que los participantes examinasen las ramificaciones que podría originar una controversia de esa índole, se estudiaron igualmente otras cuestiones que versaban sobre los Estados involucrados, la sucesión de Estados en los tratados y la responsabilidad de los Estados.

Publicaciones sobre derecho internacional y de la paz

17. A partir de 1986, la UNESCO ha publicado diversas obras:

- Edward McWhinney. Les Nations Unies et la formation du droit. Relativismo cultural e ideológico y formación del derecho internacional para una época de transición. París, Pedone/UNESCO, 1986, 292 páginas. Esta obra es la traducción de United Nations Law Making. Relativismo cultural e ideológico y formación del derecho internacional para una época de transición. Nueva York/Londres/París, Holmes & Meier/UNESCO, publicado en 1984 (274 páginas).
- The International Bill of Human Rights. Utrecht, Instituto de Derechos Humanos de los Países Bajos, 1986, 198 páginas. Publicado en inglés en 1986 y en francés en 1988.
- International Law, News and information from Asia and the Pacific. Boletín de enlace publicado dos veces al año a partir de diciembre de 1986. Bangkok, Dependencia regional de la UNESCO para las ciencias sociales y humanas, Oficina regional principal para Asia y el Pacífico.
- Etat des ratifications des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme au 1er janvier 1987/Chart of Ratification of Major International Human Rights Instruments as of 1 January 1988. (Bilingüe, inglés/francés), París, UNESCO.
- René-Jean Dupuy. La communauté internationale entre le mythe et l'histoire. París, Económica/UNESCO (colección "Nouveaux défis en droit international"), 1987, 182 páginas.
- Nigel Rodley. The Treatment of Prisoners under International Law París/Londres, UNESCO/Clarendon Press (New Challenges to International Law No. 4, 1987, 374 páginas (se publicará en español en 1989)).
- Répertoire mondial des institutions de recherches et de formation sur la paix. París/Londres, UNESCO/Berg, 1988, 271 páginas (edición trilingüe inglés/francés/español).
- "América Latina: Enseñanza del Derecho Internacional Público". UNESCO, Caracas (colección Estudios y documentos URSHSLAC), 1987, 131 páginas (en español).
- En 1989, la UNESCO publicará en edición trilingüe (español, francés e inglés) de un Repertorio mundial de instituciones de enseñanza y de investigación del derecho internacional.

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

[Original: inglés]
[16 de junio de 1989]

1. En la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se prevé un plan para la solución de controversias internacionales en que se recurre tanto a la jurisdicción contenciosa como a la consultiva de la Corte Internacional de Justicia. En la Reglamentación internacional de salud figura una disposición análoga.
2. Si bien la OMS se ha beneficiado de una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, los Estados miembros no han utilizado el procedimiento de arreglo de controversias debido a que muchas de las cuestiones que competen a la OMS no son de las del tipo que generan graves controversias a nivel internacional.

UNION POSTAL UNIVERSAL

[Original: francés/inglés]
[28 de junio de 1989]

La Unión Postal Universal (UPU) ha establecido tres medios para arreglar las diferencias entre dos o más administraciones postales con respecto a la interpretación de las Actas de la Unión y a la responsabilidad adquirida en virtud de la aplicación de dichas Actas, a saber:

- a) La solicitud de un acuerdo común sobre la opinión de la Oficina Internacional en virtud del párrafo 2 del artículo 113 del reglamento general; pero esta opinión no obliga a las partes;
- b) El compromiso especial previsto en el párrafo 3 del artículo 127 del reglamento general;
- c) El recurso al procedimiento de arbitraje previsto en el artículo 32 de la Constitución; este procedimiento se hará obligatorio cuando una de las partes se valga del recurso.

"Artículo 127: Procedimiento de arbitraje"

1. Para arreglar una controversia mediante arbitraje, cada una de las administraciones postales que sea parte en la causa seleccionará una administración postal de un país miembro que no esté involucrado directamente en la controversia. Cuando varias administraciones hacen causa común, se contarán como una sola administración para los fines de esta disposición.
2. Si una de las administraciones partes en la causa no actúa respecto de una propuesta de arbitraje dentro de un plazo de seis meses, la Oficina Internacional, si así se solicita, pedirá a la administración que no haya actuado que nombre un árbitro o nombrará uno de oficio.

3. Las partes en la causa pueden acordar nombrar un solo árbitro, que podrá ser la Oficina Internacional.

4. La decisión de los árbitros se adoptará por mayoría de votos.

5. En caso de empate, los árbitros seleccionarán otra administración postal, que no esté involucrada en la controversia, para resolver la cuestión. En caso de que no logren ponerse de acuerdo en cuanto a la elección, la Oficina Internacional procederá a nombrar a la administración de entre administraciones no propuestas por los árbitros.

6. Si la controversia se refiere a uno de los Acuerdos, los árbitros se podrán nombrar solamente de entre las administraciones que sean partes en dicho Acuerdo."

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

[Original: inglés]
[17 de abril de 1989]

1. En tres de los tratados internacionales que administra la OMPI se prevé un mecanismo para el arreglo de controversias jurídicas entre los Estados partes en el tratado pertinente. Los tres tratados son el Convenio de París para la protección de la propiedad intelectual (Acta de Estocolmo, 1967; art. 28), la Convención de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas (Acta de Estocolmo, 1967 y Acta de París, 1971; art. 33) y la Convención Internacional de Roma para la protección de los artistas ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión (art. 30). Los textos de los artículos que se mencionan son prácticamente iguales. En ellos se prevé la presentación ante la Corte Internacional de Justicia de toda controversia surgida entre dos Estados partes en el tratado respecto de su interpretación o su aplicación si la controversia no se soluciona mediante negociaciones o si las partes no llegan a un acuerdo sobre ningún otro método de arreglo de la controversia. En lo concerniente a los dos tratados mencionados en primer lugar, el mecanismo es optativo, es decir: un Estado que llega a ser parte en el tratado puede determinar que las disposiciones del artículo pertinente no se aplican en su caso.

2. Al 1° de enero de 1989, de los 99 Estados partes en el Convenio de París, 74 Estados están obligados por las disposiciones que establecen la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, y 25 no lo están. De esos 25 Estados, 20 decidieron no aceptar la obligatoriedad de esas disposiciones, mientras que los otros 5 Estados se encuentran todavía (y únicamente) obligados por los textos del Convenio adoptados antes de 1967, año en que se introdujeron por primera vez esas disposiciones.

3. En lo concerniente a la Convención de Berna, la situación es la siguiente: de los 82 Estados partes en esa Convención, 61 Estados están obligados por las disposiciones que establecen la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia y 21 no lo están. De esos Estados, 14 decidieron no aceptar la obligatoriedad de esas disposiciones, mientras que los otros se encuentran todavía (y solamente) obligados por los textos de la Convención adoptados antes de 1967, año en que se introdujeron por primera vez esas disposiciones.

4. En lo concerniente a la Convención de Roma, los 32 Estados partes en esa Convención están obligados por las disposiciones que establecen la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia.

5. Con la asistencia del Comité de Expertos sobre la Propiedad Intelectual Respecto de los Circuitos Integrados, la Oficina Internacional de la OMPI está preparando un proyecto de tratado que se examinará en la Conferencia de diplomáticos para la concertación de un tratado sobre la protección de la propiedad intelectual respecto de los circuitos integrados, que se celebrará en Washington, D.C. en mayo de 1989. El proyecto de tratado contiene disposiciones sobre los procedimientos de consultas para el arreglo de controversias que surjan cuando uno de los Estados contratantes estime que otro Estado contratante no ha cumplido con sus obligaciones o se ha excedido de sus derechos en virtud de lo dispuesto en el tratado.

6. Con arreglo al artículo 12 del Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Asamblea General ha autorizado a la OMPI a pedir opiniones consultivas a la Corte Internacional de Justicia sobre las cuestiones jurídicas que surjan dentro del campo de sus actividades, salvo aquellas que se refieran a las relaciones recíprocas entre la organización y las Naciones Unidas u otros organismos especializados.

7. En el artículo 27 del Acuerdo entre el Consejo de la Federación Suiza y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, para determinar el estatuto jurídico de la organización en Suiza ("Acuerdo relativo a la Sede"), se prevé que cada parte presente a una corte de arbitraje compuesta de tres miembros toda diferencia de opinión sobre la aplicación o a la interpretación del Acuerdo relativo a la Sede sobre la que las partes no hayan logrado llegar a un arreglo mediante la celebración de consultas directas. Cada parte designará un miembro de la Corte, y los miembros nombrados elegirán un presidente; si no hubiese acuerdo entre los miembros respecto de la selección del presidente, éste será designado por el Presidente de la Corte Internacional de Justicia por petición de los miembros del tribunal de arbitraje.

ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

[Original: inglés]
[16 de junio de 1989]

La política del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en la esfera del arreglo pacífico de controversias se basa en los principios de la Carta de las Naciones Unidas, desarrollados ulteriormente en la Declaración de Manila. Todos los acuerdos en que es parte el OIEA prevén la negociación directa como medio principal de arreglo de controversias y la posibilidad de recurrir al arbitraje y al arreglo judicial.

ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO

[Original: inglés]
[13 de junio de 1989]

En la respuesta del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) figura una lista cronológica de las denuncias recibidas hasta junio de 1987 de conformidad con el artículo XXIII del Acuerdo General, lista preparada por la secretaría del GATT para el Grupo de negociación sobre arreglos de controversias de la Ronda Uruguay, así como el texto de la decisión de las partes contratantes sobre las mejoras de las normas y procedimientos de solución de diferencias del GATT aprobados el 12 de abril de 1989. Ambos documentos se encuentran a disposición de quienes lo soliciten en la División de Codificación de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaría.

B. Otras organizaciones intergubernamentales

CONSEJO DE EUROPA

[Original: inglés]
[5 de junio de 1989]

1. La Convención europea para el arreglo pacífico de las controversias contiene disposiciones relativas a los procedimientos para el arreglo pacífico de controversias entre Estados miembros del Consejo de Europa (véase la sección I); en otros convenios y acuerdos del Consejo de Europa también se prevén los recursos de negociación, conciliación, arbitraje y procedimiento iniciales para lograr el arreglo pacífico de las controversias (véase la sección II).

2. Aunque el Estatuto del Consejo de Europa no contiene disposición alguna que se refiera directamente a esta cuestión, tanto el Comité de Ministros como la Asamblea Consultiva, establecidas en virtud del Estatuto, pueden lograr el arreglo pacífico de una controversia. Por ejemplo, la Asamblea puede investigar la situación y tratar de reconciliar a las partes; el Comité de Ministros puede actuar de mediador y formular recomendaciones a los gobiernos e invitarlos a informarle acerca de las medidas adoptadas para cumplir con dichas recomendaciones. A los órganos

establecidos por el Comité de Ministros, como el Comité europeo sobre problemas delictivos y el Comité permanente de la Convención relativa a la conservación de la fauna y la flora y del medio ambiente natural de Europa (véase el párrafo 14 *infra*), se ha encomendado la tarea de facilitar un arreglo amistoso de cualquier dificultad que pueda surgir en la ejecución de ciertos convenios.*

I. Convención europea para el arreglo pacífico de las controversias
(Serie de tratados europeos ETS 23 - 1957)

3. En virtud del capítulo I de esta Convención, las partes someterán a la Corte Internacional de Justicia todas las controversias jurídicas internacionales que surjan entre ellas, en particular, las que se refieran a:

- a) La interpretación de un tratado;
- b) Toda cuestión de derecho internacional;
- c) La existencia de cualquier hecho que, de establecerse, constituiría la violación de una obligación internacional;
- d) El carácter o la medida de la compensación que corresponda a la violación de la obligación internacional.

4. En el caso de otras controversias, o cuando las partes en la controversia hayan convenido en recurrir al procedimiento de conciliación antes que al arreglo judicial, en el capítulo II se prevé que las partes someterán a la conciliación todas las controversias que surjan entre ellas. La convención prevé el establecimiento de una comisión permanente de conciliación por las partes interesadas o una comisión especial de conciliación. La Convención contiene detalles sobre los procedimientos de la Comisión Especial de Conciliación.

* Artículo 9 de la Convención europea para la represión del terrorismo (ETS 90 - 1977);

Artículo 10 del segundo Protocolo Adicional de la Convención europea sobre Extradición (ETS 98 - 1978);

Artículo 10 del Protocolo Adicional de la Convención europea sobre asistencia mutua en cuestiones penales (ETS 99 - 1978);

Artículo 17 de la Convención europea sobre el control y la adquisición de armas de fuego por particulares (ETS 101 - 1978);

Artículo 23 de la Convención sobre el traslado de personas sentenciadas (ETS 112 - 1983) y el Artículo 31 de la Convención europea sobre delitos relativos a la propiedad cultural (ETS 119 - 1985).

5. Se recurre al arbitraje en el caso de controversias distintas de las previstas en el capítulo I que aún no han sido resueltas mediante conciliación, bien porque las partes hayan convenido en no recurrir previamente a dicha conciliación o por haber fracasado el procedimiento de conciliación (cap. III).

6. Las disposiciones de la Convención no son aplicables a las controversias en que las partes convienen en someterse a otro procedimiento de arreglo pacífico. Con respecto a las controversias a que se refiere el capítulo I, las partes no podrán invocar como propios los acuerdos en que no se prevea un procedimiento que entrañe decisiones obligatorias.

7. La Convención no afecta la aplicación de las disposiciones de la Convención europea de derechos humanos.

8. Si una de las partes en una controversia no cumple con las obligaciones contraídas en virtud de una decisión de la Corte Internacional de Justicia o en virtud de un fallo del Tribunal de Arbitraje, la otra parte podrá apelar al Comité de Ministros del Consejo de Europa, que podrá formular recomendaciones con miras a asegurar el cumplimiento.

II. Otros convenios y acuerdos del Consejo de Europa relativos al arreglo de controversias

9. Otros convenios y acuerdos del Consejo de Europa, además del recurso a la negociación y a la conciliación para lograr el arreglo de una controversia, también prevén los siguientes medios de arreglo:

a) Arbitraje

10. El artículo 47 del Convenio europeo sobre la protección de animales transportados de un país a otro (ETS 65 - 1968) prevé que, en el caso de que las autoridades competentes no puedan arreglar una controversia de conformidad con el Convenio, ésta se someterá a arbitraje.

11. De conformidad con el artículo 71 del Convenio europeo sobre previsión social (ETS/78 - 1972), si las negociaciones o una opinión emitida por el Comité de Ministros del Consejo de Europa no logran arreglar la controversia, ésta se someterá al procedimiento de arbitraje.

12. También se prevé el procedimiento de arbitraje en el Acuerdo europeo provisional sobre planes de seguridad social para ancianidad, incapacidad y sobrevivientes (ETS 12 - 1953) y el Acuerdo europeo provisional sobre la seguridad social, aparte de los planes para ancianidad, incapacidad y sobrevivientes (ETS 13 - 1953). En virtud del artículo 11 de ambos acuerdos, si la negociación no logra resolver una controversia, se la someterá a arbitraje. En el artículo 20 del Convenio europeo sobre la asistencia social y médica (ETS 14 - 1953) figura una disposición análoga.

13. De conformidad con el artículo 10 de la Convención europea para la Represión del Terrorismo (ETS 90 - 1977), si no puede lograrse un arreglo amistoso, la controversia se someterá a arbitraje a petición de cualquiera de las partes.

14. El artículo 18 de la Convención relativa a la conservación de la fauna y la flora y del medio ambiente natural de Europa (ETS 104 - 1979) trata del arreglo de controversias y prevé que el Comité Permanente establecido en virtud de la Convención realizará los mayores esfuerzos por facilitar un arreglo pacífico de cualquier dificultad. Si no se arregla la controversia, ésta se someterá a arbitraje a petición de una de las partes, a menos que se acuerde otra cosa.

15. El Acuerdo europeo sobre la transferencia de la responsabilidad por los refugiados (ETS 107 - 1980) también contiene un artículo relativo al arbitraje. De conformidad con el artículo 15, si una controversia no se arregla mediante la negociación u otros medios, ésta se someterá a arbitraje a solicitud de cualquiera de las partes.

16. La Convención europea sobre funciones consulares (ETS 61 - 1961) requiere que, antes que nada, las partes en una controversia traten de resolverla por medio de negociación, conciliación o arbitraje o mediante cualquier otro método de arreglo pacífico aceptado de común acuerdo entre las partes (art. 56, véase además el párrafo 19 infra).

17. De conformidad con el artículo 26 del Convenio europeo sobre las transmisiones transfronterizas de televisión, si las partes interesadas no pueden arreglar una controversia de conformidad con las disposiciones del artículo 25 del Convenio, la someterán a arbitraje, procedimiento previsto en un apéndice del Convenio.

b) Procedimientos judiciales

La Corte Internacional de Justicia

18. En el párrafo 1 del artículo 31 de la Convención europea sobre el establecimiento (ETS 19 - 1955) prevé que toda controversia relativa a la aplicación de la Convención se someterá a la Corte Internacional de Justicia mediante acuerdo especial o mediante solicitud de una de las partes en la controversia, a menos que las partes convengan en recurrir a un método diferente de arreglo pacífico. El párrafo 2 del artículo 31 prevé que después de la entrada en vigor de la Convención europea para el arreglo pacífico de las controversias, las partes en dicha Convención aplicarán las disposiciones de carácter obligatorio a todas las controversias que puedan surgir entre ellas en relación con la Convención sobre el establecimiento. El artículo 19 del Convenio europeo sobre la fundación de sociedades contiene disposiciones análogas (ETS 57 - 1966).

19. En el artículo 56 de la Convención europea sobre funciones consulares (ETS 61 - 1967) se prevén procedimientos para el arreglo pacífico de controversias de común acuerdo. Si las partes no logran solucionar la controversia, ésta se someterá a la Corte Internacional de Justicia a petición de una de las partes.

20. En el Convenio Europeo sobre la Inmunidad de los Estados (ETS 74 - 1972) también se prevé que las controversias se sometan a la Corte Internacional de Justicia a solicitud de una de las partes en la controversia o mediante acuerdo especial, a menos que las partes convengan en un método distinto de arreglo pacífico de la controversia (art. 34, véase además el párrafo 21 infra).

El Tribunal Europeo

21. El Protocolo Adicional del Convenio Europeo sobre la Inmunidad de los Estados (ETS 74 - 1972) añade disposiciones relativas a un procedimiento europeo para el arreglo de controversias que puede reemplazar a la Corte Internacional de Justicia. El Tribunal Europeo, establecido por el Protocolo, puede adoptar una decisión sobre la interpretación y aplicación del Convenio.

La Comisión y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

22. Cualquier parte en la Convención europea de derechos humanos (ETS 5 - 1950) puede someter a la Comisión Europea de Derechos Humanos cualquier presunta violación de la Convención por otra parte contratante (art. 24). El procedimiento se conoce como la "solicitud entre Estados". La Comisión investiga el caso y, si la conciliación ha fracasado, cualquiera de los Estados partes en una controversia puede someter el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, siempre que se haya reconocido la jurisdicción del Tribunal. El caso también puede ser presentado al Tribunal por la Comisión o por otra parte contratante de la Convención, si se presume que sus nacionales han sido víctimas.

23. Los Estados se comprometen a aceptar los fallos del Tribunal en todo caso en que sean partes (art. 53) y el Comité de Ministros supervisa el cumplimiento del fallo (art. 54).

24. Si el caso no se somete al Tribunal, el Comité de Ministros decide si ha habido una violación de la Convención y, de ser necesario, se asegura de que se adopten medidas satisfactorias para hacer cumplir el fallo (art. 32).

25. En el artículo 62 se prevé que las partes, salvo mediante acuerdo especial, no invocarán tratados, convenios o declaraciones vigentes entre ellas con fines de someter, mediante petición, una controversia derivada de la interpretación o aplicación de esta Convención a un medio de arreglo distinto de los previstos en la Convención.

Anexo

COMUNICACION DE LA ASOCIACION DE DERECHO INTERNACIONAL

[Original: inglés]
[20 de marzo de 1989]

En las conferencias de la Asociación celebradas en Seúl (1986) y Varsovia (1988) se impartieron cursos prácticos sobre los diversos aspectos del arreglo pacífico de controversias entre Estados.
